

EL ÁNGULO CIEGO: CONTRA UN PACTO PARA LA RUPTURA*

En las últimas semanas se ha hecho muy presente en los medios españoles la idea de que la crisis en la que se encuentra sumida España exige un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En ocasiones ese pacto es denominado “de Estado” y en ocasiones se propone incluso un Gobierno compartido entre socialistas y populares.

Con mucha frecuencia, en ese contexto se citan los Pactos de la Moncloa u otros pactos destacados como ejemplo de lo que se debe hacer por el bien del país.

No hay duda de que muchas de estas propuestas pueden ser formuladas con la mejor intención; tampoco la hay de que, en ocasiones, se formulan con intenciones menos elevadas. En todo caso, merecen una reflexión.

Los Pactos de la Moncloa fueron impulsados por una idea genérica de modernización económica y política de España con dos grandes metas como horizonte: en primer lugar, el ingreso de España en las Comunidades Europeas; en segundo, la consolidación de un sistema político democrático. Las dos cosas se hicieron verosímiles a partir de las elecciones de 1977, cuando se abrió un proceso constituyente –como es lógico, mediante la

* Este texto es una versión revisada de una ponencia presentada ante la Fundación Concordia el día 15 de marzo de 2010.

Miguel Ángel Quintanilla Navarro es politólogo.

búsqueda de consensos-, y cuando las Comunidades Europeas aceptaron la candidatura española, que había sido rechazada dos veces con anterioridad.

Había en aquel momento problemas inmediatos a los que atender en el orden económico y en el político, y se abordaron con esa idea compartida de lo que debía ser el futuro del país. Pero conviene recordar inmediatamente que eso sólo fue posible después de que fuera descartada la ruptura, a la vista del éxito del reformismo en el referéndum para la Ley de la Reforma Política y en las propias elecciones de 1977. Fue ese pacto primario entre el Gobierno y los electores a favor de la reforma el que hizo luego posible el pacto entre los partidos.

En todo caso, con matices y con diferencias lógicas entre partidos, diferencias que son precisamente las que legitiman la Constitución como un marco amplio capaz de albergar a diversas ideologías, todos los actores políticos relevantes llegaron a compartir la idea de que ése era el horizonte deseable para España.

Por eso, en su vertiente económica los pactos impulsaron, dentro de lo posible, una política de ajuste y de saneamiento, mediante medidas que pretendieron devolver al mercado su capacidad de asignar recursos eficientemente y otorgar al empresario un papel central en la organización y en la dirección de los procesos productivos. Se trataba de impulsar la flexibilidad y la liberalización de los mercados, de equilibrar la economía, de reformar el sistema fiscal y la política de rentas para contener la inflación y facilitar la competitividad y el crecimiento, en primer lugar mediante un tipo de cambio de la peseta distinto.

Los Pactos de la Moncloa se denominaron “Programa de saneamiento y reforma”, programa que impulsaba el Gobierno y para cuya ejecución buscó el apoyo del resto de los partidos. Se sabía que iba a ser un proceso costoso y continuado de ajustes más o menos intensos y siempre condicionados por la particular coyuntura política en la que todo eso se estaba produciendo, y se sabía que la opinión pública había expresado una preferencia electoral clara en ese sentido. En suma, había un mandato y un Gobierno que lo lideraba.

Desde el punto de vista político, las medidas que acompañaron a los acuerdos económicos fueron como anticipos de lo que poco después consagró la propia Constitución en materia de libertades públicas y democratización de las instituciones, y hoy carece de sentido pretender reeditarlas. Es más, algunas de ellas prolongaron una cierta querencia “orgánica” del sistema que ha dejado secuelas importantes con el paso de los años, como la capacidad no de interlocución sino, en la práctica, de bloqueo sindical.

Por resumir todo esto en términos muy generales, y como explicó Enrique Fuentes Quintana, los Pactos de la Moncloa pretendían evitar que España se alejara del núcleo económico y político europeo de cual quería llegar a formar parte.

Poco después, las Comunidades Europeas iniciaron un camino que condujo, primero, a la aprobación del Acta Única Europea y al programa de creación del Mercado Interior, luego al Tratado de Maastricht y finalmente al euro y al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ese camino es coherente con una manera concreta aunque no dogmática de entender la economía y se emprendió después de una década de errores que bloquearon las políticas previstas en los tratados europeos del año 1957, errores que ahondaron aún más el efecto de las crisis de 1973 y de 1979 y que en buena medida recuerdan a los que hoy vuelven a reproducirse. Errores que no comenzaron a superarse seriamente hasta que el Gobierno francés del presidente Mitterrand puso fin a su equivocada política económica en 1983, hecho decisivo en el rumbo adoptado poco después por el Gobierno socialista español y por las propias Comunidades Europeas.

Unos años más tarde, el derribo del Muro de Berlín permitió acelerar el proceso de convergencia europeo porque una buena parte de las resistencias ideológicas al mismo quedaron –aparentemente– desactivadas, y porque Alemania, en prenda por su reunificación, ofreció su moneda al resto de los socios comunitarios.

Es en esa corriente económica y política general, en ese proceso de modernización que culmina en la adopción del euro, en el que la economía española ha ido integrándose progresivamente. Primero, mediante una

durísima reconversión industrial ejecutada por los Gobiernos socialistas ayudados por las políticas de cohesión de la Unión Europea y entorpecidos por una parte del socialismo y por algunos otros actores sociales, que terminaron por generar incoherencias graves y efectos económicos muy lamentables, especialmente en forma de desempleo.

Luego, los Gobiernos populares supieron corregir los errores básicos de las políticas socialistas y mejorar sus aciertos hasta dar coherencia a un modelo mucho más equilibrado, fundador del euro y creador de empleo, un modelo que para tener continuidad requiere de una actitud reformista constante, porque ése es el espíritu que lo anima.

Pues bien, de ese modelo básicamente compartido desde los Pactos de la Moncloa ha apartado a España el Gobierno socialista en los últimos años, y lo ha hecho deliberadamente porque ni quiere ese método ni quiere sus resultados.

Un pacto es un compromiso acerca de un comportamiento futuro. Una garantía sobre lo que se hará y lo que no se hará. Pactar acerca de políticas difíciles pero necesarias permite evitar un juego electoralista contra-productivo (el que consiste en ocultar a la opinión pública lo que realmente se piensa porque eso puede alejar el éxito electoral) y hace posible un programa de reformas sostenido a medio plazo. Pero sobre todo, traslada a la opinión pública un mensaje claro acerca de que un cambio de Gobierno no evitará los sacrificios que se deben hacer.

Sin embargo, nada de esto está actualmente en el debate público español. El Gobierno niega que deba hacerse lo que siempre ha sido necesario hacer para restaurar los equilibrios económicos básicos e incluso niega que tales equilibrios deban procurarse, porque entiende el desequilibrio como una especie de compensación entre ricos y pobres, cuando se trata sencillamente de gastar sin pagar.

Hay una gran diferencia entre un pacto entre dos partidos que quieren hacer lo mismo y acuerdan excluir de la disputa política ordinaria todo aquello que sea necesario para lograr ese objetivo, y un pacto entendido

como la desactivación de dos proyectos genuinamente diferentes y contradictorios a favor de un tercero carente de coherencia y de utilidad. La incoherencia no debe ser una elección voluntaria, y más cuando impide el retorno a los pactos previamente adoptados.

Porque pactos ya había. Lo que pasa es que el Gobierno ha decidido emanciparse de los pactos, incluido el modelo económico para tiempos de crisis. Ésa es su responsabilidad. Pero la responsabilidad de quien cree que esa emancipación es un error histórico es oponerse razonadamente y ofrecer a los electores y a los países con los que estamos vinculados por acuerdos firmes la esperanza de que la alternancia traerá un Gobierno distinto.

Lejos de lo que se dice, la negativa de la oposición a facilitar un pacto alejado de la ortodoxia comunitaria no sólo no daña la credibilidad del país sino que la protege, porque mantiene viva la esperanza de la restauración del sentido común. Ésa es la responsabilidad de la oposición.

Y la de quienes dentro del Partido Socialista están en desacuerdo con el rumbo que ha adoptado el Gobierno, si es que lo están, es procurar que ese extravío termine lo antes posible. Quizás es éste el momento de recordar lo que Felipe González dijo a su propio partido en su discurso de apertura del Congreso de 1988, como justificación de su política económica: “Las cosas que es necesario hacer son tan socialistas como las que nos gustaría hacer. Desde ese enfoque hay que analizar lo que venimos haciendo desde la transición democrática”.

Los Pactos de la Moncloa fueron protagonizados por actores políticos aún poco consolidados, en una situación de excepcionalidad económica y política en la que era imposible el normal funcionamiento de las instituciones propias de una democracia madura, y actores que tenían una idea general compartida acerca de cuál debía ser el futuro del país. Ahora eso no ocurre.

Más aún: un Gobierno en el que se encontraran juntos el PSOE y el PP dejaría al sistema sin oposición real y sin alternancia posible y causaría un gravísimo problema de gobernabilidad. La idea de fijar una agenda pura-

mente “técnica” para ese tipo de gobierno no oculta el hecho de que los Gobiernos no pueden controlar su propia agenda porque hay quien trata de fijársela. Un Gobierno de pura técnica económica no quedaría exento de gobernar todo lo demás, de modo que un acuerdo en el terreno económico (que no existe) tendría que ser gestionado en mitad de un desacuerdo casi completo sobre muchas otras cosas. Si eso generase la impresión de desgobierno y en ausencia de oposición real, de alternativa, el sistema quedaría expuesto a todo tipo de amenazas: es un serio problema para una democracia que las elecciones dejen de tener utilidad para resolver sus problemas, incluido el de la desilusión.

Por otra parte, un Gobierno de ese tipo provocaría un efecto todavía peor que el mencionado, porque anularía el eje izquierda/derecha como el terreno de la disputa política ideológica fundamental y exacerbaría el eje nación/nacionalismo, que es el que más está dañando la cohesión social. La política española se sobrecargaría aún más de líneas de fractura identitarias y territoriales, puesto que ése sería el único terreno posible sobre el que hacer oposición y sobre el que los dos partidos de gobierno podrían mantener su visibilidad pública.

Todo esto hace muy inconveniente la sustitución de los procedimientos previstos para restaurar el buen gobierno en las democracias maduras por métodos arbitristas que crearían un problema de Estado para resolver un problema de gobierno. La realidad es que la izquierda y la derecha piensan cosas notablemente diferentes sobre lo que se debe hacer para recuperar el crecimiento económico. Su idea sobre el gobierno económico es muy distinta, y esas diferencias no deben oscurecerse ante la opinión pública sino iluminarse más hasta hacerlas perfectamente visibles. Sólo así podrán ser objeto de una disputa electoral útil y sólo así las elecciones producirán un mandato nítido para un Gobierno fuerte pero sometido al control de la oposición y ajustado a los equilibrios institucionales previstos. Si algo se quiere imitar de los pactos de la Transición imítese esto: primero se pide un mandato a los electores que fija el rumbo del país en la modernización, la moderación, la europeización y la reforma; luego se busca un acuerdo con los partidos que aceptan ese rumbo.

Nada desearía más el Gobierno socialista que anular la disputa ideológica en el eje izquierda/derecha y hacer que toda la política española girara en torno a cuestiones identitarias y territoriales, especialmente cuando nos acecha una segunda vuelta de la negociación con ETA, entre otros asuntos graves. Y nada haría más daño a los españoles, necesitados de un debate político situado en el terreno de la modernidad y de que el voto se les pida mediante argumentos y razones de alcance general conscientemente alejados de la deriva identitaria que envenena la política española y la sitúa en ese extraño territorio demarcado por la alianza de premodernos y posmodernos en la que nos consumimos desde hace algunos años. Alianza que tan claramente explica Javier Zarzalejos en este mismo número de *Cuadernos de Pensamiento Político*¹.

Ninguno de los participantes en aquellos pactos de 1977 tenía una responsabilidad directa en la situación que se trataba de remontar; ahora, sí. Ninguno trabajaba para quebrar un marco institucional previamente pactado; ahora, sí.

Los Pactos de la Moncloa son casi un contraejemplo de lo que padecemos. Porque lo que padecemos es mucho más que una crisis económica. La economía es sólo un síntoma de algo más profundo, de una crisis institucional que es a su vez una crisis nacional inducida por el Gobierno.

Lo que se ha hecho en España durante los últimos años por parte del Gobierno ha sido quebrar el espíritu y el contenido incoados en los Pactos de la Moncloa y actualizados en cualquier otro pacto importante posterior, empezando por la Constitución, que ahora es imaginativamente interpretada por él como el acto mediante el cual la nación española decidió privarse a sí misma de expresión jurídico-política alguna: es decir, el nuestro no fue un proceso constituyente sino un proceso “destituyente” o un proceso constituyente invertido.

Hay una impugnación radical de la historia española de los últimos 35 años en las políticas y en las actitudes del Gobierno, una imputación de

¹ **Zarzalejos, Javier:** “Identidad y política en España.”

ilegitimidad a todos los acuerdos que permitieron crear y desarrollar la España de la Transición, lo que, por cierto, hace del PSOE de González un mero colaboracionista de una especie de postfranquismo interminable, un partido ése liderado por González al que Zapatero declaró “muerto” tras su derrota de 1996 en una famosa entrevista² hace unos años: “Cuando nació mi hija mayor, por ejemplo, yo estaba asistiendo al declive de mi partido. Una cosa muere y nace otra”. En esa misma entrevista, José Andrés Torres Mora afirma: “La generación de Felipe González tiene un gran relato sobre sí misma, un relato épico. Nosotros somos una generación sin relato. Más aún: nuestra generación no hace relato, no relata, no escribimos, no hay cosas nuestras. No estuvimos detenidos, no conocimos el mayo del 68, no contribuimos a construir una democracia que apreciábamos, pero en la que no había sitio para nosotros, pues cuando intentamos irnos de casa, no había un mercado laboral en el que refugiarnos. No podíamos ser ciudadanos porque no se puede ser ciudadano en casa. Se es ciudadano en la calle, en el trabajo, en el ágora, en el Parlamento... Nosotros, para salir adelante, nos hemos tenido que mover en el ángulo ciego de la sociedad. Adelantamos a Bono en el congreso del PSOE por ese lado, lo mismo que a Aznar”.

Zapatero no es un español de la Transición, no es un español de la reforma ni del pacto, es un español de la ruptura. O si se prefiere, del ángulo ciego de nuestra historia. Su valor histórico es el del contrafactual: ¿qué nos habría pasado si en lugar de la reforma hubiéramos elegido la ruptura? Nos habría pasado lo que nos está pasando.

Insisto: ya había pactos sobre todo aquello sobre lo que ahora se solicitan; y esos pactos han sido minuciosamente desactivados. Incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento original, cuya voladura fue auspiciada por dos malos Gobiernos de dos grandes países, Francia y Alemania. Y fue aplaudida por el Gobierno español con el argumento de que era bueno dejar que ellos fueran entonces irresponsables con sus cuentas públicas porque así nosotros podríamos serlo más adelante. Ellos han rectificado y han visto hasta dónde llegan los efectos de aquella decisión, pero nosotros, no.

² www.elpais.com/articulo/portada/viaje/Zapatero/elpepspor/20060723elpepspor_5/Tes.

De lo que se trata ahora es de saber qué va a hacer el PSOE con Zapatero. Y no sólo en economía, porque es muy probable que de aquí a poco a la economía se añadan otras muchas crisis de alcance institucional, que Alemania ha resuelto en sentido exactamente contrario al nuestro, fortaleciendo la cohesión territorial. Cuando se pregunta por qué en España no es posible hacer lo mismo que en Alemania la respuesta es sencilla: porque Zapatero no es Merkel.

Si el PSOE se decidiera a repudiar seriamente lo que Zapatero significa para su propia historia y para la historia de España, entonces la recuperación de los pactos sería relativamente sencilla: para empezar, la Constitución con valor normativo pleno, los Estatutos sin pretensión constituyente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento originario y una política económica europeísta. Todos ellos patrimonio adquirido en régimen de bienes gananciales por casi todos los partidos españoles, patrimonio al que incomprendiblemente el PSOE ha decidido renunciar. Desde esa sólida base sería posible abordar asuntos fundamentales, como el cierre del Estado autonómico –quizás se podría tomar como base el informe del Consejo de Estado–, la educación, las pensiones o la revisión de las relaciones intergubernamentales, por ejemplo.

Pero el obstáculo primero es el Gobierno. No se le pedía que firmara los Pactos de la Moncloa, ni que consensuara la Constitución o que pusiera en marcha el Estado autonómico, ni que lograra la adhesión de España a las Comunidades, ni la reconversión industrial, ni la normalización de las relaciones atlánticas, ni mucho menos que hiciera posible la entrada de España en el euro o la convergencia de renta con la media comunitaria. Sólo se le pedía que no echara a perder todo ese ingente esfuerzo intergeneracional y transideológico, y que actuara dentro de los límites que habían sido acordados. No ha sido posible.

En este momento ni el Gobierno ni el PSOE son interlocutores válidos para la firma de acuerdos de alcance nacional, porque ni el Gobierno ni el PSOE son instituciones con jurisdicción nacional real. El Gobierno de España ha decidido actuar como si no tuviera nada que ver con Cataluña, y el PSOE carece de presencia en esta Comunidad. Y, por lo declarado re-

cientemente por el presidente del Partido Socialista del País Vasco, es dudoso que la tenga ahí³.

España tiene muchos problemas, pero los problemas realmente graves son los que le ha creado el Gobierno con el apoyo o la anuencia del PSOE, además de algunas otras fuerzas políticas: un debilitamiento crítico del modelo de Estado, cuya flexibilidad no estaba pensada para hacer que colapse sino para hacer que funcione, y un abandono consciente de los criterios que hacen posible que una economía forme parte del euro.

En definitiva, el alejamiento de los dos objetivos históricos enunciados por Enrique Fuentes Quintana, dos objetivos nacionales que con cuantas variantes se quiera habían impulsado a España desde 1975 y hacen comprensible su deslumbrante éxito histórico de las últimas décadas. Hoy hay un Gobierno que no quiere que eso continúe. Eso es lo que se debe explicar y para oponerse a ello es para lo que se debe solicitar un mandato claro en las urnas.

Eso se sana con alternancia y con una crisis del socialismo español que lo devuelva a la modernidad política y lo aleje, a ser posible de modo definitivo, de la deriva identitaria y nacionalista en la que ahora se encuentra.

Los pactos útiles ya existían. Y los únicos que merecen ser firmados son aquellos que sirvan para restaurar el valor normativo de la Constitución y para devolver a España a la gran corriente histórica de la que nos estamos alejando.

En estas condiciones, con este Gobierno esencialmente rupturista de los pactos que ya había, la idea de que la salida de esta crisis nacional en la que nos encontramos pasa por un pacto liderado por Zapatero es como pensar que anudar nuestro zapato derecho a nuestro zapato izquierdo podría ayudarnos a caminar más deprisa.

³ Así se desprende claramente de las declaraciones de **Jesús Eguiguren** al diario *Público* el 21 de febrero de 2010.

PALABRAS CLAVE

España • Libertad • Democracia

RESUMEN

La profunda crisis nacional que padece España ha llevado a muchos a solicitar un acuerdo entre el PSOE y el PP para impulsar una salida común. Sin embargo, la naturaleza ideológica del Gobierno presidido por Zapatero, que ha roto los pactos que ya existían y que ahora se piden, no sólo hace imposible ese camino sino que, consecuentemente, aconseja no perder demasiado tiempo tratando de avanzar por él. Lo único que puede situar a España de nuevo en la senda de la que el Gobierno la ha alejado es la alternancia política basada en la obtención de un mandato electoral nítido y en la firme voluntad de darle cumplimiento.

ABSTRACT

The deep national crisis that Spain is suffering has led many to request an agreement between the PP and the PSOE to spur a common exit to the crisis. Nevertheless, the ideological nature of Zapatero's Government, which has broken the agreements that were already in place and that are being asked for now, not only makes that path an impossible one, but consequently, it suggests not to lose too much time trying to advance that way. The only thing that can place Spain back again on the direction it has been diverted from by the Government is political alternation based on having a clear electoral mandate and in the determined will of fulfilling it.

1 año de edición digital



www.revistadelibros.com
esto sólo es el comienzo...

suscripciones@revistadelibros.com (+34) 913 194 833 / (+34) 913 083 336